

TEXTO

THEA RIOFRANCOS

TRADUCCIÓN

VALENTÍN HUARTE

ILUSTRACIONES

SAEL

UNO SE DIVIDE EN DOS

Los gobiernos progresistas y los movimientos antiextractivistas se enfrentaron con frecuencia en las décadas recientes. En Ecuador el conflicto asumió tal magnitud que se convirtió en la contradicción central. Y el resultado fue desastroso.





Después de una intensa temporada de campaña, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador se llevó a cabo el 7 de febrero de 2021. Ningún candidato obtuvo los votos suficientes para evitar una segunda vuelta. Más sorprendente fue que, en el recuento de votos inicial, parecía que dos izquierdistas se enfrentarían en la segunda vuelta: Andrés Arauz (Unión por la Esperanza), economista y exministro del gobierno de Rafael Correa, contra Yaku Pérez (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik), activista contra la minería y expresidente de la federación indígena de la sierra, ECUARUNARI.

Los candidatos presentaron dos perspectivas de cambio distintas: Arauz hizo campaña con un programa posneoliberal de profundización del proyecto de «socialismo del siglo XXI» de Rafael Correa, aunque actualizado para enfrentar el momento de la pandemia y la grave crisis económica; Pérez, en cambio, hizo campaña con una plataforma antiextractivista que, aunque limitada en algunos de sus detalles, incluía una clara oposición al desarrollo minero y petrolero y una afirmación de los derechos indígenas, la plurinacionalidad y el buen vivir.

Sin embargo, una vez finalizado el conteo de votos, resultó que Arauz no competiría contra Pérez, sino contra Guillermo Lasso, un banquero millonario de derecha que se postulaba para presidente por tercera vez. Esta coyuntura le planteó serios dilemas estratégicos al movimiento indígena. Los integrantes de la federación de nacionalidades indígenas, la CONAIE, finalmente se decidieron por un «voto nulo ideológico»: no votarían por ninguno de los candidatos dado que sentían que ninguno de los dos representaba sus preferencias políticas. Este voto nulo (17,88%) combinado con unos niveles inusualmente altos de abstención (15,7%, lo que refleja un profundo desencanto a nivel popular) y el exitoso despliegue de los tropos de la derecha que hizo Lasso resultaron en la derrota del progresismo.

Ya corrió mucha tinta sobre el análisis de las «responsabilidades». Sin embargo, esta coyuntura contradictoria plantea dilemas políticos que no se dejan pensar en términos de culpables o inocentes, sino que adoptan la forma de un interrogante: ¿por qué el populismo de izquierda y el antiextractivismo llegaron a ser fuerzas políticas que se oponen la una a la otra? Responder a esta pregunta requiere analizar los dilemas y las limitaciones a los que se enfrentó la izquierda en

el poder durante las décadas progresistas, pero también aquellos a los que se enfrentan los movimientos que exigen que los presidentes progresistas cumplan sus promesas de transformación profunda.

¿La soberanía de quién?

En Ecuador, una larga historia de movilizaciones populares en torno al eje de la nacionalización, fundada no solo en la militancia de los trabajadores petroleros, sino también en los movimientos indígenas —que llegaron a rechazar en muchos casos el extractivismo *tout court*— terminaron por definir a los recursos naturales como una propiedad colectiva del pueblo soberano. Aquí, soberanía significa lo opuesto a dependencia, una condición que tiene aspectos a la vez locales (la desarticulación de ciertos enclaves de la economía nacional), nacionales (la alianza política entre las élites domésticas y los inversores extranjeros), regionales (competencia económica con países vecinos) y globales (el rol del capital internacional y la vulnerabilidad de los precios de las *commodities*).

Sin embargo, es precisamente la dependencia de las exportaciones de materias primas la que volvió históricamente esquivo el objetivo de la soberanía. Esta forma de dependencia económica implica nuevas formas de sometimiento —recientemente frente a una China en ascenso—, que exponen a Ecuador a los ciclos de auge y decadencia característicos de los mercados de *commodities* y a la competencia interestatal con los países vecinos.

A lo largo de la época progresista, Ecuador y otros gobiernos aliados aplicaron importantes innovaciones en el modelo de contrato de concesiones mineras y petrolíferas que incrementaron la recaudación estatal. Sin embargo, las nacionalizaciones clásicas, que recurren a expropiaciones completas, tuvieron un alcance muy limitado comparado con períodos anteriores: predominaron los mecanismos de venta forzada de activos, participación mayoritaria en los paquetes accionarios y la creación de empresas mixtas. En este sentido, las empresas extranjeras siguieron teniendo una influencia significativa sobre el proceso extractivo,

sobre los territorios en los que se desarrolla y hasta sobre las instituciones estatales supuestamente encargadas de hacer cumplir las regulaciones.

También debe decirse que, lo mismo en Ecuador que en otros países, es en los sectores extractivos en donde se observan las continuidades más claras entre las políticas neoliberales y ciertas reformas posneoliberales. Más importante aún es notar que si la variante de desarrollismo de mediados del siglo pasado apuntaba a la industrialización rápida —mediante la que se buscaba reducir progresivamente la porción de la economía dedicada a la extracción y ascender en la ladera de la sofisticación económica—, el «neodesarrollismo» progresista hizo las paces con los mercados de trabajo dominados por el sector de servicios y priorizó la extracción por sobre la manufactura.

Uno de los dilemas centrales que subyace a la soberanía nacional y a los recursos naturales parece expresarse en una pregunta sin respuesta: ¿quiénes

conforman «la nación» que supuestamente es dueña de la riqueza que proviene de los recursos naturales? En Ecuador, esta «nación» fue articulada por primera vez en la década de 1970 luego del intento que hizo un gobierno militar de reivindicar el control estatal sobre sector petrolero. En los años 90, estos reclamos surgieron desde abajo en una coalición de sec-

tores rebeldes que reivindicaban la soberanía popular sobre los recursos del subsuelo. Luego de décadas de conflicto con el Estado y con las empresas extractivas, los grupos indígenas llegaron a definirse a sí mismos como «naciones» y «pueblos» que reclamaban legítimamente la soberanía y la autodeterminación territorial.

Estos reclamos fueron apuntalados inicialmente por Correa mediante la difusión de la Constitución de 2008, que definía a Ecuador como un Estado plurinacional y estipulaba toda una serie de nuevos derechos colectivos para las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubianas. Sin embargo, una vez que la izquierda llegó al poder, la coalición de base de orientación antineoliberal —en cuya coordinación

¿Por qué el populismo de izquierda y el antiextractivismo llegaron a ser fuerzas políticas que se oponen la una a la otra?

las federaciones indígenas nacionales y regionales habían jugado un rol vital y que apoyaba al gobierno de Correa — rápidamente empezó a perder su fuerza de oposición y su unidad organizativa.

En los años siguientes, la persecución de Correa hacia los manifestantes antiextractivistas exacerbó la fragmentación existente del «bloque social de los oprimidos» que había sido la punta de lanza de las protestas antineoliberales. La «nación» a la que Correa seguía convocando —articulada por primera vez por la coalición de sectores populares que lo llevó al poder— estaba perdiendo el vínculo con sus condiciones de existencia históricas: reuniones, asambleas, protestas y el repertorio discursivo común que se tejía a través de estas acciones. La «nación» se había convertido en el recurso ideológico de un populismo izquierdista desde arriba, cuya subsistencia dependía exclusivamente de las *commodities* en lugar de sustentarse en una subjetividad colectiva mediada de forma ecuánime.

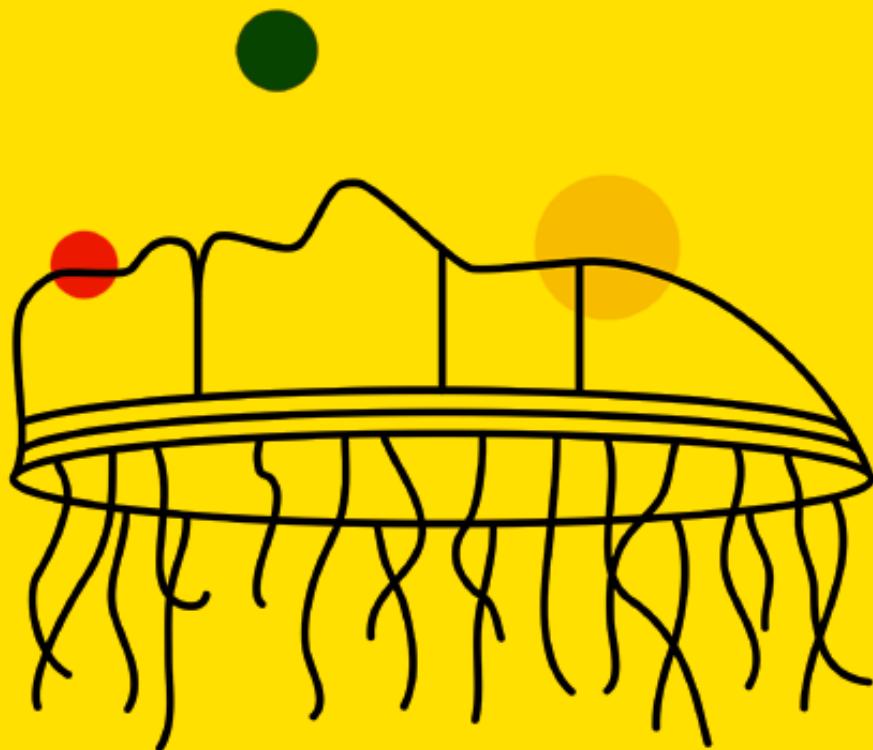
La izquierda en el poder

Uno de los dilemas centrales del gobierno de Correa fue que su dependencia de la renta de las materias primas entró en conflicto con sus objetivos de igualdad social. En tiempos de auge, la renta permite garantizar beneficios materiales a los menos pudientes, precisamente porque se puede prescindir en ese caso de la redistribución del ingreso, por no mencionar las expropiaciones. Haciéndose eco de los acuerdos de la socialdemocracia de los Estados capitalistas más importantes durante la época de posguerra —posibilitados a su vez por la abundancia de energía barata—, el crecimiento basado en la exportación de *commodities* parece ser un juego de suma positiva: los gobiernos pueden aumentar los ingresos de los más pobres sin reducir la riqueza de los ricos, con lo que garantizan el apoyo político de los primeros sin provocar la reacción de los últimos.

Además, el «Estado compensatorio» ayuda a mitigar el conflicto social que suscita el extractivismo: para un gobierno de izquierda democráticamente electo no es viable responder a la resistencia antiextractiva solo mediante la represión. De aquí las innovaciones contractuales y las reformas legislativas que canalizan parte de la renta de los recursos naturales a las comunidades directamente afectadas.



La «nación» se había convertido en el recurso ideológico de un populismo izquierdista desde arriba, cuya subsistencia dependía exclusivamente de las commodities.



Con todo, los volátiles patrones de gasto estatal terminan respondiendo en términos generales a los ciclos de auge y decadencia de las *commodities*. Para los Estados cuya base fiscal depende de la renta de las materias primas, las condiciones del mercado mundial representan un límite importante al presupuesto, especialmente si tienen bajas tasas de tributación nacional. Y los precios del petróleo son un límite especialmente apremiante para Ecuador, que es «tomador de precios» y que, además, utiliza el dólar estadounidense como moneda y por lo tanto carece de la herramienta que podría ofrecerle una política monetaria expansiva.

Debe subrayarse que, contra las descripciones convencionales de los «Estados rentistas», los ciclos de precios no bastan para explicar el contenido ni las metas del gasto. Las formas específicas de gasto estatal que adoptó el gobierno de Correa —programas de transferencias de efectivo mensuales, servicios de salud y educación, infraestructura pública e inversiones dirigidas en las comunidades directamente afectadas por los proyectos de minería y petróleo— estuvieron influenciadas por trayectorias más largas de desarrollo estatal y conflicto social, y moduladas por una com-

prensión particular del posneoliberalismo que circulaba entre los actores estatales.

En un Estado definido históricamente por la desigualdad territorial, la nueva infraestructura pública facilitó tanto la incorporación política como la integración de mercados, lo que sirvió como una potente demostración de presencia estatal (reforzada a su vez por las cartelería que acompañaba cada proyecto de obra pública, que anunciable la «Revolución Ciudadana» y declaraba con precisión el monto invertido). El hecho de que los actores estatales en Ecuador tendieron a definir al neoliberalismo como ausencia del Estado y, en consecuencia, al posneoliberalismo como un Estado presente, fortaleció esta forma visible de intervención pública en la vida socioeconómica.

En efecto, al desafiar los estereotipos del Estado rentista, durante el auge de las *commodities* el gobierno de Correa hizo progresos importantes en la expansión directa de la tributación y adoptó una política fiscal más progresiva, que aplicó nuevos impuestos sobre las grandes propiedades y las exportaciones de capital. El gasto, sin embargo, superó tanto a la renta como a los nuevos impuestos, y Ecuador se

endeudó cada vez más con China y con los bancos de desarrollo regionales. Además, la dependencia de la renta de las materias primas —tanto en el caso de la redistribución como en el del gasto dirigido hacia las comunidades afectadas por la extracción— solo reforzó el imperativo extractivista que, como argumenta Eduardo Gudynas, en el mismo movimiento «crea nuevos impactos sociales y medioambientales que a su vez requerirán nuevas compensaciones».

Cuando los militantes antiextractivistas se movilizaban contra estos impactos socioambientales, los actores estatales invocaban las políticas de redistribución y de compensación para legitimar la expansión de la frontera extractiva. La tendencia a incrementar el gasto social —muchas veces para compensar los daños— evidencia el carácter provisional que tiene todo «acuerdo político» en las economías extractivas y la existencia de una dinámica ideológicamente mediada que se retroalimenta en un circuito que abarca la amplia redistribución, la compensación localizada y el desarrollo extractivo.

En toda la región, el descenso de los precios de las *commodities* desestabilizó el equilibrio de las fuerzas de clase que les había garantizado a los gobiernos izquierdistas una módica protección frente a la reacción conservadora. Como dice Jeffrey Webber, a pesar de beneficiarse de los años de crecimiento sostenido basado en las exportaciones —años durante los cuales presidieron estos gobiernos— las élites económicas al final no fueron leales: «durante un período de caída de la rentabilidad e inestabilidad política creciente, los capitalistas volvieron al hogar natural que siempre les brindan las formaciones de vieja o nueva derecha».

Con todo, las características del modelo de acumulación y las relaciones sociedad-Estado que describimos más arriba —la incorporación popular a través de programas de bienestar y compensaciones para las comunidades directamente afectadas, ambas pagadas

con el dinero que llovía de la renta de los recursos naturales, y la fragmentación de la coalición de base que se había movilizado contra el neoliberalismo— limitaron las alternativas una vez que los ingresos se contrajeron.

Fue en el marco de este contexto regional que, en 2017, la Alianza País enfrentó las elecciones nacionales más competitivas desde la asunción de Correa, y Lenín Moreno derrotó por poco al rico banquero (ahora presidente) Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales. En Ecuador, como en la mayor parte del continente, la salida de la izquierda gobernante estuvo sobre determinada.

La izquierda que resiste

Los gobiernos progresistas no monopolizaron las políticas izquierdistas durante la llamada «marea rosa». Algunas veces en colaboración, otras en conflicto con estos gobiernos, también existió otra izquierda que resistía: movimientos sociales que utilizaban medios de acción y manifestación extraparlamentarios, y que presionaban a los partidos políticos gobernantes y a las autoridades electas para que implementaran las grandes transformaciones que habían prometido en sus plataformas de campaña, discursos de inauguración y aperturas de sesiones legislativas.

El descenso de los precios de las commodities desestabilizó el equilibrio de las fuerzas de clase que les había garantizado a los gobiernos izquierdistas una módica protección frente a la reacción conservadora

A pesar de que el fenómeno no fue exclusivo de Ecuador, fue allí donde las agresivas confrontaciones entre el gobierno nacional izquierdista y los movimientos sociales —antiguos aliados— alcanzaron su máxima expresión. Y luego de que el extractivismo se convirtió en el punto decisivo de esa disputa, se instauró una dinámica de polarización que hizo que las posibilidades de colaboración fuesen cada vez más escasas.

Al igual que la izquierda en el poder, la izquierda que resistía también fue sacudida por una serie de dilemas. Del mismo modo en que las conquistas de la primera estaban limitadas por las contradicciones de un

modelo económico-político, en parte heredado y en parte inventado por estos gobiernos, la otra izquierda fue afectada por las contradicciones que planteaba una crítica y una estrategia centradas en movilizar a los sectores directamente afectados en contra del desarrollo fundado en la extracción de materias primas.

Los movimientos antiextractivistas se anotaron conquistas impresionantes: lograron detener proyectos extractivos específicos y darle una nueva forma al debate más amplio sobre la extracción de recursos naturales, lo que forzó a los actores estatales y a las empresas a responder a nuevos reclamos y reivindicaciones. Sin embargo, hasta la fecha, los activistas antiextractivistas no pudieron organizar un movimiento de masas de una magnitud y fortaleza equivalentes a las de la coalición de los sectores populares que llevó a los gobiernos izquierdistas al Estado por primera vez.

Para comprender estos logros y estos límites es necesario reflexionar sobre tres dilemas que enfrentó la izquierda en posición de resistencia: en primer lugar, los dilemas de la crítica del extractivismo; en segundo lugar, los dilemas del posextractivismo en tanto alternativa positiva; en tercer lugar, los dilemas del antiextractivismo en tanto estrategia política.

Extractivismo y discurso crítico

«Extractivismo» es el término central de un discurso crítico que recombina vetas preexistentes del pensamiento latinoamericano con discursos más recientes sobre el medioambiente y la cuestión indígena. Constituye una crítica de cierta formación social a la que denomina extractivismo y —esto es importante— incluye a la izquierda tradicional en esta formación, dado que percibe tanto en el capitalismo como en el socialismo de Estado una excesiva indiferencia por la armonía sionatural.

La crítica le debe mucho a la teoría de la dependencia y expande la caracterización que esta hizo de las economías organizadas alrededor de la exportación de materias primas. También comparte con esta escuela de pensamiento un relato que comienza con la violencia de la colonización y rastrea sus efectos de largo plazo en los patrones de saqueo, acumulación, concentración y destrucción neocoloniales contemporáneos. Como su progenitora, el extractivismo presta

atención a la desigualdad territorial constitutiva del capitalismo global y, más específicamente, a la estructura fractal de centros y periferias, una estructura que se reproduce incesantemente a través de fronteras extractivas siempre en expansión.

En este sentido, tanto el gobierno progresista de Ecuador, con su insistencia característica en el nacionalismo que apuntaba a la soberanía sobre los recursos naturales, como el antiextractivismo se sirvieron igualmente del bagaje de la teoría de la dependencia. El primero consideraba que el subdesarrollo estaba fundado en la ausencia histórica de soberanía nacional y concluía que la extracción dirigida por el Estado era una vía hacia el desarrollo equitativo; el segundo, en cambio, se enfocaba en los males de la «superexplotación» de los recursos naturales con vistas a la exportación.

Pero el discurso crítico del extractivismo difiere de la tradición izquierdista en aspectos importantes. Los teóricos de la dependencia anticipaban vías para salir de la situación de dependencia y, al interior, se dividían entre aquellos que abogaban por vías de desarrollo nacionalistas-desarrollistas y aquellos que abogaban por vías revolucionarias. Unos tenían expectativas en una alianza entre el Estado y el capital nacional, mientras que otros esperaban terminar en el mismo movimiento tanto con la dependencia como con el capital. En contraste, el discurso del extractivismo no solo rechaza el «desarrollo» como meta, sino que considera que el modelo extractivo está profundamente encastado en la estructura social, en la ideología y hasta en la subjetividad, a tal punto que pone en cuestión incluso la posibilidad de una transformación revolucionaria.

De acuerdo con Gudynas, los males que produce el extractivismo recorren un camino que los lleva mucho más lejos de los sitios de extracción. Para desarrollar un proyecto extractivo específico, los gobiernos deben desmantelar las protecciones laborales y medioambientales y adoptar modelos de contrato que favorecen a los inversores. Pero los «efectos de derrame» de estas reformas políticas facilitan los proyectos extractivos en general. La infraestructura de transporte que los acompaña también inicia un efecto dominó de reorganización territorial: los nuevos caminos atraen a poblaciones humanas, expanden la frontera agrícola y conllevan más deforestación.

Sin embargo, desde la perspectiva del extractivismo en tanto crítica, los efectos de derrame ideológico son todavía más profundos. Según esta interpretación, el extractivismo se convierte en un sentido común hegemónico, que Maristella Svampa define como «consenso de las *commodities*», y que estructura los parámetros de la política y funciona en un registro afectivo, cegando a los sujetos frente a la lógica del capital extractivo. Sirviéndose de una elocuente metáfora biológica, Alberto Acosta se refiere al «ADN extractivista enquistado en nuestras sociedades» y a una especie de astucia que «atrapa» con sus malvados tentáculos hasta a los críticos más radicales del capitalismo.

Pero esta crítica del extractivismo también tiene sus problemas. Tal vez el más importante es la dificultad de brindar una perspectiva posextractivista y una estrategia antiextractivista: si el extractivismo es un sistema ideológicamente cerrado y completo que dispone de una variedad de mecanismos ideológicos capaces de asegurar su reproducción y su expansión, entonces, a falta de una conmoción exógena, cualquier posibilidad de transformación resulta imposible. De aquí el problema de imaginar la forma en que podría surgir una sociedad posextractiva a partir de la sociedad extractiva actualmente existente.

También se relacionan con esto los desafíos del antiextractivismo en tanto estrategia política. Más específicamente, ¿qué sujeto político es capaz de dirigir este proceso de transformación? ¿Cuál es la composición de este sujeto? ¿Por qué medios podría desmantelar el extractivismo y organizar una sociedad posextractiva en su lugar?

Según la cronología del pensamiento antiextractivista, antes de una sociedad posextractiva debería darse un período de transición. O, al menos, una campaña coordinada para disminuir los proyectos extractivos, garantizar fuentes de ingresos estatales alternativas y remediar los daños sociales y ambientales. De embarcarse en una campaña de este tipo, se enfrentaría el obstáculo inmediato del poder disciplinario del capital: la revocación de las concesiones o la modificación de las condiciones contractuales inevitablemente llevará a las empresas extranjeras a apelar en los tribunales encargados del arbitraje entre inversores y Estados. Recientemente en Ecuador cuatro empresas



La territorialización local de la resistencia es a la vez una fortaleza y una debilidad.

petroleras apelaron a estos tribunales. El resultado fue una compensación de alrededor de 2000 millones de dólares para tres de ellas y la revocación de un fallo de 9500 millones de dólares a favor de Ecuador.

Aun dejando de lado este obstáculo, se plantea la cuestión de la compleja temporalidad de una transición posextractiva. Mientras que los militantes antiextractivistas exigen al calor de la lucha política el cese inmediato de los proyectos mineros y petroleros, algunos intelectuales aliados y especialistas en políticas públicas teorizan sobre un «decrecimiento planificado» que eliminaría gradualmente la extracción sin dejar de canalizar renta para responder a las necesidades sociales hasta que, en un primer momento, se desarrolle nuevos sectores económicos y, en un segundo momento, se consolide la capacidad de recaudación del Estado.

Estos planes deben evitar la trampa de un futuro posextractivo siempre diferido. Quiero decir que hasta los burócratas «críticos» con los que conversé invocan la imposibilidad de una transición de la noche a la mañana para justificar la expansión de la extracción. En este sentido, dice Jeffrey Weber, el incremento de la «capacidad de consumo» de los sectores populares se convirtió en un fin en sí mismo, «en vez de ser la base para rupturas estructurales más audaces con el orden existente».

Al abordar este problema, Miriam Lang distingue entre el ritmo y la dirección del cambio, y argumenta que cuando se evalúa el progreso de la creación de una sociedad posextractiva, debe priorizarse el último. Esto implicaría pensar la orientación en términos de un primer cambio desde el modelo de extractivismo «depredador» reinante hacia un extractivismo «sensible» —en el que se fortalezcan y se hagan cumplir las regulaciones socioambientales, lo que a su vez conllevará simultáneamente el incremento de las capacidades estatales y la reducción de los niveles de actividad extractiva—, al cual le seguiría una transformación hacia el extractivismo «índispensable», que es la extracción de recursos naturales mínima que se necesita para «garantizar la calidad de vida de la población en términos sustentables» y en los parámetros definidos por las cadenas de suministro regionales y nacionales.

La esquiva meta del «buen vivir»

Además de los desafíos asociados a cualquier proceso político de larga duración, la transición que pretende dejar atrás el modelo extractivo enfrenta también el dilema de articular la definición positiva de un nuevo tipo de sociedad. El *sumak kawsay* [buen vivir] apunta precisamente a eso. En los debates entre activistas y académicos acerca de los modelos alternativos de desarrollo, el *sumak kawsay* suele ser un discurso adyacente al del posextractivismo. Postula una sociedad fundada sobre un principio de armonía entre los individuos, las comunidades y la naturaleza gobernado por relaciones sociales basadas en la reciprocidad y en la solidaridad que priorizan «la reproducción de la vida» —comprendida en términos suficientemente amplios como para incluir la naturaleza no humana— y «no la del capital».

Aunque a veces se presenta en términos de «cosmovisiones» y formas de vida indígenas, moduladas por la memoria colectiva, el *sumak kawsay* es un discurso reciente que surgió a comienzos del nuevo milenio y se orienta hacia el futuro en términos de una «utopía andina y amazónica». Pero la ambigüedad del concepto enturbia la imagen utópica que se busca proponer. Esto se debe en parte a la versatilidad del término quechua *kawsay*, una palabra compuesta que data de la antigua época colonial de Perú y cuyo sentido abarca un espectro de connotaciones que van desde la existencia y la subsistencia básicas hasta la salud y el bienestar. Además, el término en sí mismo refleja los proyectos políticos distintos y hasta opuestos a los cuales estuvo vinculado.

Habitando «tierras culturales fronterizas» entre el indigenismo y la sociedad capitalista dominante, el *sumak kawsay* remite tanto a ciertos discursos establecidos sobre la sustentabilidad medioambiental y los derechos indígenas como a sus variantes más radicalizadas. En la región, los críticos del extractivismo utilizan el concepto en un registro utópico para criticar la realidad existente desde el punto de vista de un futuro deseado. Pero también aparece en el preámbulo de la Constitución de Ecuador de 2008 —y se repite en varias secciones del texto—, adorna los documentos del gobierno y constituye una especie de palabra clave en el discurso oficial. Los actores estatales utilizaron el concepto de *buen vivir* para promover



nuevas fronteras de mercantilización y acumulación —por ejemplo, el sector de bioconocimiento— y mi propia investigación demuestra que existe una discrepancia entre el uso generalizado del término en los sectores académicos y su uso mucho menos frecuente entre los activistas (que refleja, tal vez, su opinión de que el concepto fue contaminado por el uso oficial).

Además de estas ambigüedades conceptuales, las perspectivas utópicas posextractivistas del tipo del *sumak kawsay* enfrentan el dilema de la escala territorial. Sea que se ponga el eje en la agricultura sustentable, en la producción artesanal, en la gestión del agua, la tierra y otros recursos comunes o en las prácticas culturales que deberían apuntar a integrar nuevamente la vida social en la naturaleza, el punto de partida recurrente de estos discursos es la pequeña comunidad rural, con frecuencia indígena. El eje que se pone en este contexto socioespacial particular plantea al menos dos desafíos vinculados con la escala: en primer lugar, el desafío de «ampliar» su alcance desde

la comunidad local hacia órdenes de la vida social cada vez más amplios; en segundo lugar, el desafío de desplegarlo desde las zonas rurales hacia las urbanas.

El desafío comunitario

El desafío de la escala territorial está estrechamente relacionado con el tercer y último conjunto de problemas que enfrenta la izquierda que resiste, a saber, los que plantea la estrategia política, especialmente cuando se considera que el discurso antiextractivista suele estar centrado en las comunidades directamente afectadas. Estas comunidades, localizadas en las zonas inmediatas de extracción, son a la vez el sujeto colectivo y el sitio geográfico de las protestas contra el desarrollo minero y petrolero. Esta territorialización local de la resistencia es a la vez una fortaleza y una debilidad.

Por un lado, la movilización a nivel de las comunidades puede obstruir uno de los puntos nodales de

la economía política de la extracción y, al reducir la velocidad o detener por completo algunos proyectos específicos, moldear los contornos más amplios de la frontera extractiva. Por otro lado, esta forma de movilización enfrenta la dificultad de organizar una coalición de sectores populares más amplia, con capacidad de tomar el poder político y transformar el modelo de acumulación.

Los académicos observan en la región un incremento de los conflictos vinculados con los recursos naturales, especialmente en el sector minero, que actualmente está en expansión. Este conflicto toma en muchos casos la forma de una oposición local a los proyectos extractivos y/o de reivindicaciones por más compensaciones y enfrenta directamente a las comunidades afectadas contra las empresas y, en muchos casos, también contra las instituciones estatales que promueven o supervisan el proceso extractivo.

En estos casos son importantes el tipo de proyecto, la escala y la propiedad: particularmente polémicas son las empresas extranjeras que practican la minería a cielo abierto. A esto deben añadirse las regulaciones legales y las organizaciones políticas, que también influyen en la forma que adopta la resistencia. La importancia de las «comunidades directamente afectadas» es en parte el resultado de la disponibilidad de instrumentos legales y nacionales, como las consultas y los recursos de amparo (denominados «acciones de tutela» en Colombia), que apuntan a proteger los derechos humanos de su posible violación en manos de los Estados o de las empresas. Estos instrumentos reconocen a la comunidad local como sujeto de derechos particulares y brindan instancias institucionales para combatir los proyectos, sea a través de la organización de consultas locales, de la participación social en evaluaciones de impacto ambiental o de los tribunales regionales y nacionales.

Sin embargo, una estrategia antiextractiva centrada en las comunidades directamente afectadas es, por su

propia naturaleza, una estrategia limitada: la fuerza moral y legal de sus querellas y demandas se funda en la apelación a la proximidad espacial y, con frecuencia, en derechos particulares vinculados a esta proximidad (y/o al estatus étnico). A pesar de que esta estrategia demostró ser efectiva a la hora de combatir proyectos específicos, es sorteada a gran escala dada la desigualdad territorial y fragmentaria de la extracción. Además, en ausencia de alianzas fuertes y solidaridad organizada, el aislamiento territorial de las comunidades directamente afectadas las hace vulnerables a la represión estatal.

Para pasar de una posición defensiva de resistencia a una posición ofensiva de hegemonía política, el antiextractivismo debería sumar fuerzas con una coalición más amplia de sectores populares urbanos y rurales. Esta coalición debería incluir no solo a aquellos que no son directamente afectados por la extracción, sino también a quienes se benefician de los programas sociales y de la infraestructura pública financiada por la renta de las materias primas. Se trata de una población mucho más grande que la de las comunidades que se encuentran en la primera línea y que son las «directamente afectadas». Con todo, el que esta ampliación de escala no haya ocurrido hasta ahora no significa de ninguna manera que, bajo las condiciones adecuadas, no pueda desarrollarse en el futuro.

Unidad en la lucha

El 1º de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno —sucesor y antiguo aliado político de Correa— implementó una serie de medidas de austeridad que eran parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entre estas medidas se contaba la eliminación de un subsidio a la nafta y al diésel que estaba en vigencia desde hacía muchos años. Inmediatamente, una coalición que incluyó al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y a la CONAIE anunció una serie de protestas. Diez días después, luego de que

movilizaciones masivas inundaron las calles de Quito, ocuparon la Asamblea Nacional y muchos campos petrolíferos —forzando al gobierno a relocalizarse temporalmente en Guayaquil— Moreno acordó una negociación con la CONAIE. Como resultado del diálogo, los manifestantes lograron su principal reivindicación: renovar la aplicación del subsidio a los combustibles, además de iniciar una investigación oficial sobre la represión estatal que tuvo como consecuencia nueve muertes, cerca de mil heridos y más de mil detenidos.

Entre los aspectos más importantes de este episodio de lucha se destaca la rearticulación de una coalición de sectores populares —movimientos de trabajadores, jóvenes e indígenas; sectores rurales y urbanos; de la sierra y del Amazonas— en donde la CONAIE jugó un rol de dirección fundamental. La similitud con los acontecimientos de mediados de los años 1990 fue impactante. Un rasgo crucial fue que esta alianza provisoria no tenía una orientación antiextractivista. En realidad, si tenía alguna orientación, parecía ser una forma de nacionalismo radical con énfasis en la soberanía sobre los recursos naturales.

¿Puede esta alianza provisoria revivir y profundizarse en el futuro? En términos superficiales, podría parecer contradictorio que el movimiento social que lucha para mantener el subsidio al gas sea el mismo que exige desde hace décadas la reducción de las emisiones de carbono y el achicamiento de los proyectos extractivos. Pero la reivindicación no apuntaba al gas en sí mismo. Lo que estaba en cuestión era un nivel de vida digno con acceso a la energía necesaria para disfrutar de los servicios básicos. Y cada vez estamos más seguros de que esa energía puede ser generada a partir de recursos renovables.

Ahora que la derecha está de vuelta en Ecuador, la izquierda debe reagruparse y recalibrar sus miras. Pero para ello no solo debe articular una visión transformadora del *buen vivir* que logre armonizar el consumo popular y la protección del medioambiente: también debe hacerlos confluir en una lucha eficaz a la hora de desplegar una movilización de masas que mueva las palancas del poder. De otra forma, en el futuro quedará solo una izquierda de la que hablar: la izquierda derrotada. ●

Ahora que la derecha está de vuelta en Ecuador, la izquierda debe reagruparse y recalibrar sus miras.

*. Este texto es un extracto de *Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador* (Duke, 2020).